



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05360-31-05-001-2019-00252-01 (O2-22-392)
Accionante: AURELIANO CONTRERAS MONTOYA
Accionada: JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO
Procedencia: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ
Providencia: SENTENCIA No. 139
Asunto: CONTRATO REALIDAD – ACREENCIAS SOCIALES

En Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ESPECIAL – FUERO SINDICAL conocido bajo el radicado único nacional 05360-31-05-001-2019-00252-01 (O2-22-392), instaurado por AURELIANO CONTRERAS MONTOYA en contra del señor JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO, con el fin de resolver el recurso apelación interpuesto por AURELIANO CONTRERAS MONTOYA, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 20 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “...[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor AURELIANO CONTRERAS MONTOYA actuando por intermedio de gestor judicial, promovió demanda ORDINARIA LABORAL en contra del señor JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado La 40, en punto a que se declare la existencia de un contrato de trabajo con el convalidado a juicio vigente

entre el 25 de enero de 2018 y el 20 de mayo de 2019, requiriendo en consecuencia el reajuste del salario mínimo legal, el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, trabajo suplementario y de horas extras durante todo el tiempo que estuvo vigente el nexo contractual, junto con la indemnización por despido sin justa causa, la sanción por la no consignación de las cesantías a un fondo, la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST y las costas procesales.

En respaldo de sus aspiraciones señala que, inició a prestar sus servicios personales a favor del empresario accionado a partir del 25 de enero de 2018 y hasta el 20 de mayo de 2019, a través de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, para desarrollar oficios varios, percibiendo como remuneración la suma diaria de \$ 20.000. Relata que el 20 de mayo del 2019 el pretense empleador resolvió dar por terminada la relación de trabajo sin justa causa, destacando que durante la vigencia del vínculo contractual el salario fue inferior al mínimo legal mensual vigente.

Finalmente aseguró que durante el lapso que se mantuvo vigente la relación de trabajo y hasta la fecha de presentación de la demanda, el dador de laborío le adeuda las acreencias sociales inmanentes al nexo laboral.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió mediante auto el 25 de septiembre de 2019 (págs.15 a 16, doc01, carp.01), en el que se ordenó la notificación del extremo pasivo, la que se surtió el 11 de agosto de 2020 (docs.11 a 13, carp.01). El empresario requerido NO dio contestación al libelo gestor disponiendo la juzgadora de instancia continuar con el condigno trámite, señalando fecha y hora para surtir la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS, no sin antes tener la conducta del accionado como un indicio grave en su contra (doc.15, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 30 de septiembre de 2022 (doc.32, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, con la que decidió absolver al convalidado al juicio de los pedimentos reclamados por el señor AURELIANO CONTRERAS MONTOYA, gravándolo en costas.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de ahincar sobre el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades y los elementos que integran un contrato de trabajo, memoró qué es la subordinación como el elemento determinante de

esta clase de vínculos. Sumó a lo anterior, que el pretensor acreditó la prestación personal del servicio a favor del convidado a juicio; sin embargo, adujo que no se probó que la relación fuera subordinada, pues no encontró probada que la labor se haya caracterizado por una permanente disponibilidad y exclusividad (minuto 33:13 a 50:19, doc.31, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial del promotor, se mostró en desacuerdo con la sentencia dictada por la *a quo*, solicitando con la apelación se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se acceda a la totalidad de las pretensiones formuladas.

Con tal propósito sostuvo que la funcionaria judicial de primer grado no aplicó de manera correcta los efectos previstos en el artículo 31 del CPTSS, en la medida en que, para los casos en que la parte convocada a juicio no dé contestación a la demanda, dicha conducta además de derivar un indicio grave en su contra, debe conducir a tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión, entre ellos, los extremos temporales del vínculo contractual que se alega. Así mismo, asienta que con el interrogatorio de parte practicado en sede judicial, se corroboró la prestación personal del servicio, la remuneración y la jornada laboral, la que valga decir, era de domingo a domingo por trece horas diarias, abusando también de la condición de ciudadano venezolano de su prohijado (minuto 50:26 a 58:58, doc.31, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 24 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 31 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo menester.

El opugnante insistió en la necesidad de revocar el fallo criticado, enfatizando que la consecuencia que se cierne sobre el convidado a juicio en caso de que no conteste la demanda, es la declaratoria de confeso de los hechos susceptibles de confesión, con arreglo a lo previsto en el artículo 31 del CPTSS.

Así concluyó que, “...*el contrato de trabajo verbal existió a partir de las afirmaciones del actor en la demanda, que son los indicios graves en contra del demandado donde se debe dar por cierto y probado el origina(sic) del contrato de trabajo, darse por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo, que no se le pagó de manera completa sus salarios y no se le pagaron sus prestaciones sociales durante y luego de finalizar su labor el contrato de trabajo*” (doc.05, carp.02).

Por su parte, la poderhabiente judicial del accionado se opuso a la prosperidad de los pedimentos razonando en lo fundamental que, el vínculo que se mantuvo vigente entre los contendientes se rigió bajo los lineamientos de un contrato de prestación de servicios y no uno de naturaleza laboral (doc.04. carp.02).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si entre AURELIANO CONTRERAS MONTOYA y JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio Granos y Legumbres La 40 San José, existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2018 y el 20 de mayo de 2019, para así determinar si le asiste derecho al reconocimiento de las acreencias laborales deprecadas y las indemnizaciones a las que aspira.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado por razones distintas a las vertidas en la sentencia opugnada, considerando que en el *sub litium* no se verifican los hitos temporales en los que se enmarcó la relación de trabajo alegada entre las partes en disputa, incumpliendo el deprecante la carga probatoria que le incumbía, de cara a lo señalado por el artículo 167 del CGP, para la aplicación de las consecuencias que dimanarían de la presunción *iuris tantum* contenida en el artículo 24 del estatuto sustantivo del trabajo; falencia probatoria que finalmente no abrió paso al éxito de los pedimentos.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne el deber de demostrar los presupuestos fácticos

prescriptores de los derechos reclamados y hacer aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga. En otras palabras, en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo tiempo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar las pretensiones incoadas en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

2.3.1. El Contrato de Trabajo

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política y el legislador se ocuparon de brindarle una atención especial, reconociéndolo como aquel que le asiste a toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no sólo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y nivel de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Por consiguiente, para que se dé una relación de trabajo protegida por la legislación laboral, debe concurrir una tríada de elementos esenciales, a saber: (i) que la actividad desplegada por el trabajador sea personal, es decir, realizada por sí mismo; (ii) una continua subordinación o dependencia del trabajador, la que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo, calidad y lugar del trabajo, y (iii) una retribución del servicio, mediante el pago del salario convenido por las partes (artículo 23 del CST).

Reunidos estos elementos, se presume que existe un contrato de trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni por las condiciones o modalidades contractuales que se

estipulen (artículo 24 del CST), **y por tanto, al trabajador sólo le basta demostrar la ejecución o prestación personal de un servicio, para que opere en su favor la presunción de la existencia de un vínculo laboral** (CSJ SL del 29-11-1958; SL del 05-05-1982, radicado 8247; SL del 27-06-2000, radicado 14096; SL del 17-05-2011, radicado 38182; SL-10546 del 06-08-2014, radicado 41839; SL-15507 del 11-11-2015, radicado 45068; SL-16528 del 26-10-2016, radicado 46704; SL-6621 del 03-05-2017, SL-781 del 14-03-2018, radicado 47852; radicado 65768; SL-4444 del 16-10-2019, radicado 58413; SL-577 del 12-02-2020, radicado 68636; SL-3126 del 19-05-2021, radicado 68162; SL 3847 del 25-08-2021, radicado 79919); **aclarando la Sala que esta presunción no releva al trabajador demandante del deber de demostrar otros aspectos del vínculo contractual, como las condiciones en las que desarrolló la labor, como lo serían la fecha de ingreso y retiro, salario, cargo o jornada, como así lo ha determinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades, entre otras, como las sentencias del 05-08-2009, radicado No. 36549 y más recientemente del 06-06-2019, radicado 58895; del 01-12-2020, radicado 76645 y del 25-07-2023, radicado 95274.**

De lo hasta aquí discurrido, cristalino despunta que es deber del trabajador demandante en los conflictos de esta naturaleza, presentar al juzgador los elementos de persuasión que den cuenta no sólo de la prestación personal del servicio a favor de quien se reputa con la condición de verdadero empleador, para así activar la presunción contenida en el artículo 24 del CST, observando las reglas previstas en el artículo 167 del CGP.

Para el caso concreto y en lo atinente a la prestación personal del servicio alegada, la Sala subraya que, el demandante aportó como prueba documental el certificado de matrícula mercantil del empresario accionado, y la reclamación de sus acreencias laborales ante el Ministerio del Trabajo - Inspección Municipal de Itagüí (págs.8 a 11, doc.01, carp.01). De igual modo, se practicó el interrogatorio de parte del convocado a juicio JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO, quien reconoció que desde hace 30 años tiene la propiedad de un granero y que conoce al demandante al ser vecinos del mismo sector donde residen. De otro lado, confesó que desde el año 2018 el demandante prestó sus servicios personales en el establecimiento de comercio de su propiedad, desgranando y organizando frijoles, alverjas y legumbres durante 3 días a la semana, reconociendo por ello el valor diario de \$ 20.000.

Precisó que el impetrador permanecía en el local por aproximadamente dos horas, tiempo estrictamente necesario para terminar la tarea de organizar las legumbres, acotando que no había horario y, que la labor no era continua, pues el actor se trasladaba constantemente a la ciudad de Pereira o a la República Bolivariana de Venezuela con su familia, donde permanecía

por varios meses; destacando la Sala que, en sede judicial no hubo asentimiento del accionado de que la prestación del servicio haya finalizado en el mes de mayo de 2019.

Escrutados entonces los medios de convicción que fueran acopiados, es del caso concluir, sin ambages ni dubitación, que en el *sub lite*, la parte demandante demostró de manera fehaciente haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del pretenso empleador, a partir del año 2018, en el desgrane y organización de las legumbres que se comercializaban en el establecimiento de comercio denominado Granos y Legumbres La 40 San José. Inferencia que se logra a partir del acto confesorio del accionado, quien corroboró que el actor durante 3 días a la semana prestó sus servicios en el local de su propiedad, describiendo las actividades que desarrollaba y la cantidad dineraria que le pagaba como contraprestación del servicio.

Conforme lo precedente, en norte a buscar una adecuada solución al escollo que plantea el asunto litigioso y probado como está la prestación personal del servicio del señor AURELIANO CONTRERAS MONTOYA a favor de JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO, se activa la presunción *iuris tantum* contenida en el artículo 24¹ del CST, y con ello, se traslada la carga de la prueba al demandado a fin que desvirtuara los elementos propios de un contrato de trabajo; los que memora la Sala se circunscriben en i. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y; ii. Un salario como retribución del servicio.

En el panorama legal descrito, asoma una situación que no se puede dejar de lado, esto es, que, la parte accionada incumplió el deber probatorio que le incumbía, en tanto en cuanto, el convocado a juicio no contestó la demanda impetrada en su contra, y, por ende, perdió la oportunidad de aportar o solicitar la práctica de los medios de convicción que respaldaran la tesis defensiva.

Conforme lo precedente, en sana lógica, y contrario a lo argüido por la juzgadora unipersonal de primer nivel, los efectos y consecuencias procesales previstas en el artículo 24 del estatuto sustantivo laboral se mantienen incólumes; resultando necesario aclarar, aquí y ahora, por considerarse menester resolver el asunto bajo escrutinio, que en las contiendas de esta índole, una vez comprobada la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica como presupuesto inexcusable de las relaciones de trabajo dependientes no precisa ser acreditada mediante medio de convicción alguno, sino que, por el contrario, su ocurrencia se infiere de la presunción *iuris tantum* prevista en el artículo 24 del CST. Aquí la Sala memora, como en innumerables oportunidades lo ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de

¹ CST, artículo 24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Justicia, en tratándose de la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los extremos subjetivos de las relaciones laborales:

“Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral”. CSJ SL16528 de 2016, reiterada en la CSJ SL2002 de 2023.

Lo enunciado no significa que, la razón este del lado del promotor de la litis, pues revisado el diligenciamiento judicial, a juicio de la Sala, del acopio probatorio NO se traslucen elementos de persuasión que permitan fijar los hitos o extremos temporales en los que se enmarcó la prestación personal del señor AURELIANO CONTRERAS MONTOYA, aun de forma aproximada, carga probatoria que le incumbía al trabajador demandante como quedó dicho en el preludio argumental de esta decisión. Nótese que, por un lado, en el interrogatorio de parte, el demandado negó categóricamente que la actividad del deprecante se haya extendido hasta el día 20 de mayo de 2019, limitándose a afirmar que no recordaba la data en que aquel dejó de prestarle el servicio y, del otro, el pretensor mostró un endeble ejercicio probatorio, al no adosar al diligenciamiento los medios probatorios que condujeran a la Sala de Decisión a dar por cierta una fecha en la que se finiquitó el vínculo contractual entre las partes, y siendo ello así, no se vislumbra un asidero probatorio suficiente para acceder a las aspiraciones del opugnador. Así se desprende de lo delineado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en las sentencias CSJ SL1880 de 2023, CSJ SL500 de 2023 y CSJ SL 6 marzo de 2012, radicación 42167, de la que se extracta el siguiente apartado:

*En ese horizonte, es verdad averiguada que, para declarar la existencia de un contrato de trabajo, no es indispensable la demostración plena de los tres elementos de que trata el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pensar lo contrario, traduciría hacer nugatoria la presunción legal del artículo 24 ibídem, que dio sustento al fallo gravado. **Cosa distinta es que, para que se imparta condena en concreto, el promotor del proceso tenga unas cargas mínimas probatorias a efectos de obtener las consecuencias jurídicas que pretende. Aún con la activación de la presunción legal, es relevante que se acrediten otros supuestos necesarios para la prosperidad del reclamo, como los hitos temporales de la relación, el salario, la jornada laboral y el tiempo suplementario laborado, así como los demás hechos que se enarbolan como causa de las pretensiones.***

-Negritas y subrayado intencional de la Sala-

El anterior ejercicio ponderativo no varía ni aún con los efectos de confesión ficta que la censura le pretende atribuir a las consecuencias adversas previstas para el demandado que

no conteste la demanda, conforme con lo previsto en el artículo 31² del estatuto instrumental laboral, pretermitiendo que, para estos casos, dicho compendio normativo contempla la constitución de un indicio grave en su contra, mas no constituye un acto confesorio. En un asunto de similares contornos, en sentencias CSJ SL6843 de 2016, CSJ SL468 de 2019 y CSJ SL2807 de 2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló:

“...[A]l haberse dado por no contestada la demanda por parte de los accionados, debían tomarse por ciertos la totalidad de los hechos planteados en ésta, en especial, los extremos de la relación laboral y la no cancelación de las acreencias laborales, por cuanto la ley procesal del trabajo y de la seguridad social no contempla dichos efectos ante esta omisión de la parte, sino la de constituir un indicio grave en contra del demandado, según el parágrafo segundo del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., por lo que, en esa medida, la declaratoria de tener por no contestada la demanda no conduce a fijar como ciertos los presupuestos fácticos alegados por la parte actora, dado que la ley no le asigna efectos de confesión ficta, como quiere hacerlo ver la recurrente”.

Como corolario de lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas, jurídicas y probatorias explicitadas con suficiencia, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió al señor JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por parte del señor AURELIANO CONTRERAS MONTOYA, pero por las razones aquí esbozadas.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y advirtiéndose que el recurso de apelación interpuesto por AURELIANO CONTRERAS MONTOYA no salió adelante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho y en favor del demandado, la suma equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, esto es, \$ 580.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, el 20 de septiembre de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido

² Artículo 31. Forma y requisitos de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda contendrá: (...) Parágrafo 2o. La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado.

por AURELIANO CONTRERAS MONTOYA, en contra de JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO, según y conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.


SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del señor AURELIANO CONTRERAS MONTOYA, fijándose como agencias en derecho en favor del accionado señor JAIRO DE JESÚS GAVIRIA BOTERO, la suma de medio SMMLV equivalente \$ 580.000

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario